

Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA (REPARTO).

GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA)

PEDRO ILDEFONSO ARIAS ARAGON, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.871.266 de Buga (V), acreditado con la T.P. No. 64.838 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial del docente **JAIME ALBERTO BECERRA ORTIZ**, de conformidad con el poder conferido que adjunto, de la manera más respetuosa presento ante su despacho **ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL** contra el **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA**, persona jurídica de derecho público del orden Territorial, con autonomía patrimonial y económica y domicilio principal en la ciudad de **GUADALAJARA DE BUGA**, representada legalmente por el Licenciado **JHON HAROLD SUAREZ VARGAS, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA**, o por quien lo sea o haga sus veces en el momento de la notificación del auto admisorio de la presente demanda, a fin de que previos los trámites procesales previstos para el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se provea favorablemente a las pretensiones solicitadas.

I. PARTE DECLARATIVA Y CONDENATORIA

DECLARACIONES:

1. Que se declare la nulidad del oficio No. **SEM-1900-1146 del 07 de JULIO de 2014**, proferido por el Licenciado **FERNANDO JOSE HENAO FRANCO**, Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga, mediante el cual se le niega el reconocimiento y pago de la **PRIMA DE SERVICIOS**, establecida en la ley, al docente **JAIME ALBERTO BECERRA ORTIZ**.
2. -Que se declare que por ser docente que labora al servicio de establecimiento educativo ubicado en el **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA**, debe ordenarse el reconocimiento y pago de la **PRIMA DE SERVICIOS**, de conformidad con lo ordenado en el parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 91 de 1989.

II. CONDENAS:

A título de restablecimiento del derecho se ordene:

1. El reconocimiento y pago de la **PRIMA DE SERVICIOS**, establecida en los artículos 58 y siguientes del Decreto Nacional 1042 de 1978, de conformidad con el contenido del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, a mi representado **JAIME ALBERTO BECERRA ORTIZ, con efectos fiscales** a partir del 31 de enero de 2011, teniendo en cuenta el fenómeno jurídico de la prescripción.
2. Que los valores resultantes de las condenas impuestas, se determinen en sumas líquidas de moneda legal colombiana, y que se ajusten dichas sumas tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme lo dispuesto en el artículo 187 del C.C.A. hasta la fecha de ejecutoria del fallo condenatorio; dando igualmente, aplicación a la fórmula jurisprudencialmente establecida para ello por el Consejo de Estado, por cada una de las sumas individualmente consideradas por tratarse de sumas periódicas, de tracto sucesivo.
3. Que la parte demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del Código Contencioso Administrativo
4. Condenar en costas a la entidad demandada.

III. HECHOS

1. Mi mandante viene trabajando al servicio de la entidad demandada desde el **ONCE (11 DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (1979))** como consta en el certificado de tiempo de servicio que serán probanzas del proceso, de acuerdo a lo ordenado en los artículos 3 y 6 de la Ley 60 de 1993.
2. Durante el tiempo que viene desempeñando sus labores, ha percibido por concepto de factores salariales, solamente el pago de la **PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE CLIMA, PRIMA DE GRADO Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE.**
3. De conformidad con el art. 15 de la ley 91 de 1989, los artículos 3 y 6 de la ley 60 de 1993 y el artículo 115 de la ley 115 de 1994, la cancelación de la **PRIMA DE SERVICIOS**, también debe ser reconocida por la entidad nominadora a mi representada, situación que ha omitido la entidad demandada.
4. Al momento de solicitarle su cancelación a la entidad demandada, esta ha otorgado respuesta por medio del acto administrativo demandado, de manera

negativa a lo solicitado, situación que resulta ilegal a luz de la constitución política y la ley.

IV. DISPOSICIONES LEGALES VULNERADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION.

- 1. Constitución Política, Arts. 13, 25, 53 y 150**
- 2. Ley 4 de 1992, art. 1º**
- 3. Ley 91 de 1989, art. 15**
- 4. Decreto 451 de 1984, art. 3º**
- 5. Decreto 1919 de 2002**
- 6. Decreto 1042 de 1978**
- 7. Ley 60 de 1993**
- 8. Ley 115 de 1994**
- 9. Ley 812 de 2003**

CONCEPTO DE LA VIOLACION.

El acto administrativo proferido por el **MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA**, por medio del cual se negó el solicitado pago de la **PRIMA DE SERVICIOS**, es violatorio de la Constitución Política y la Ley. Por esta razón, me permito **PRESENTAR EL CASO CONCRETO**.

V. EL CASO CONCRETO

El gobierno nacional dentro de la órbita de su competencia, profirió el Decreto 1919 de 2012, y dispuso:

“Artículo 1º.- A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y Media Vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para

los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.”

“Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los factores para ellas establecidas”

*“**Artículo 5º.-** Los derechos adquiridos, considerados como las situaciones jurídicas consolidadas a favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales, que para efectos del presente Decreto se entienden como aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, no podrán ser afectados.*

*“**Parágrafo.** En concordancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992, todo régimen de prestaciones sociales que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en el presente Decreto carecerá de efecto y no creará derechos adquiridos.”*

En virtud de las disposiciones transcritas, queda claro, que las que rigen para los empleados públicos del orden nacional, son igualmente, aplicables a los empleados del orden territorial.

En este sentido, se debe señalar que el Decreto 1042 de 1978, mediante el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales del orden nacional, en su artículo 58, 59 estableció:

*“**Artículo 58.- La prima de servicio.** Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración, que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año.*

Esta prima no se regirá para los funcionarios que con anterioridad tengan asignada esta contraprestación cualquiera que sea su nombre.”

*“**Artículo 59.- De la base para liquidar la prima de servicio.** La prima a que se refiere el artículo anterior se liquidará sobre los factores de salario que se determinan a continuación:*

- a) El sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo.*
- b) Los incrementos salariales por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de ese Decreto.*
- c) Los gastos de representación.*
- d) Los auxilios de alimentación y transporte.*
- e) La bonificación por servicios prestados*

Para liquidar la prima de servicio se tendrá en cuenta la cuantía de los factores señalados en los ordinales precedentes a 30 de junio de cada año.”

De igual manera, la citada normatividad en el artículo 104 literal b) consagró:

“Artículo 104. De las excepciones a la aplicación de este Decreto. Las normas del presente Decreto no se aplicarán a las siguientes personas, cuya remuneración se establecerá en otras disposiciones:

b) Al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva”

De acuerdo con las normas transcritas, se concluye que en principio para el personal docente que pertenezca a los distintos organismos de la Rama Ejecutiva, se encontraban exceptuados del régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978.

Sin embargo, no debe perderse de vista que el Decreto 1919 de 2002, señala que todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, así como las Instituciones de Educación Superior, y aquellos que prestan sus servicios en las Instituciones de Educación Primaria, secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, es decir, se les reconocerá y pagará por concepto de prima de servicios quince (15) días del mes de julio de cada año, y su liquidación se realizará teniendo en cuenta los factores señalados en el artículo 59 de la mentada disposición.

Ahora bien, en cuanto el régimen especial de los docentes, la ley 91 de 1989, por medio del cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio, señaló:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional; Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley” (Subrayado fuera de texto).

De la norma transcrita, es dable concluir que a los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se les mantiene el régimen prestacional con el que venían, pero para los docentes nacionales y aquellos que se vinculen con posterioridad al 1º de enero de 1990, para efecto de prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes y aplicables a los empleados públicos del orden nacional. Tal preceptiva, es consonante con lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley 115 de 1993 y 81 de la Ley 810 de 2003.

Obsérvese que en ninguno de estos preceptos legales, se encuentra consagrada la prima de servicios, pues como anteriormente se indicó fue regulada en el Decreto 1042 de 1978, y de acuerdo con su articulado fue exceptuada para los docentes.

No obstante lo anterior, y para efectos de esclarecer este asunto, se precisa traer a colación lo dicho por el H. Consejo de Estado, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2012, proferida en el proceso radicado bajo el No. 68001-23-31-000-2001-02589-01 (2483-10), Magistrado Ponente GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN en donde en un caso similar señaló:

“... Interpretando las disposiciones transcritas y salvo las excepciones de leyes especiales, resulta claro que los docentes nacionales o nacionalizados vinculados a partir del 1º de enero de 1990, quedaron comprendidos dentro de las regulaciones de carácter salarial y prestacional de los demás servidores públicos, que se encuentran consignados entre otros en los Decretos 3135 de 1968, 1042 y 1045 de 1978, pues el listado de las normas no debe tenerse como taxativo”.

“Así, en lo que tiene que ver con la prima de servicios, ha de remitirse al artículo 58 del Decreto 1042 de 1978, que establece:

“Artículo 58. LA PRIMA DE SERVICIO. Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto, tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año.”

Esta prima no regirá para los funcionarios que con anterioridad tengan asignada esta contraprestación cualquiera que sea su nombre.”

“(....)”

“Por consiguiente, encuentra la Sala que a la demandante en su carácter de docente territorial le asiste el derecho al reconocimiento de la prima de servicios, por disposición expresa de la Ley 91 de 1989” (Subrayas mías).

Acogiendo el argumento expuesto por el órgano de cierre de lo Contencioso Administrativo, resulta factible señalar que los docentes nacionales o

nacionalizados vinculados a partir del 1º de enero de 1990 tienen derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicios prevista en el artículo 1042 de 1978.

En ese mismo sentido se pronunció el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, a través de la sentencia de 22 de marzo de 2012, con ponencia de la H. Magistrada Dra. Bertha Lucía Luna Benitez en el proceso No. 2011-00043-01:

“(...)”

*“Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala resulta claro que la prima de servicios se debe pagar a los docentes de cualquier orden, ya sea nacional, nacionalizado o territorial, **sin importar la fecha de su vinculación**”* (resaltado fuera de texto).

Por consiguiente considero, que si bien es cierto en principio por disposición expresa consagrada en el literal b) del artículo 104 de la Ley 1042 de 1978 los docentes fueron exceptuados de la aplicación de esta norma, no es menos cierto, que a partir del 1º de enero de 1990, se le hizo extensiva la aplicación de dicha disposición, argumento que encuentra respaldo en lo dicho por el H. Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, como ya se vio.

De lo expuesto, en el caso de mi mandante señor **JAIME ALBERTO BECERRA ORTIZ**, se tiene que se encuentra vinculado como docente nacional al servicio del municipio de Guadalajara de Buga, desde el **ONCE (11) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (1979)**, según consta en el Certificado de Historia Laboral, que se anexa a la demanda, y por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, tiene derecho a percibir las mismas prestaciones económicas y sociales que para los empleados públicos del orden nacional está constituido legalmente, esto es los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, y por ende el Decreto 1042 de 1978, según la interpretación realizada por el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

En este orden de ideas, resulta claro, que la asiste el derecho a mí representado al reconocimiento y pago de la prima de servicios.

PETICION PREVIA

Si el señor Juez considera que el acto administrativo demandado, no cumple con las exigencias establecidas en el Código Contencioso, por no llevar la

constancia de notificación, antes de la admisión de la demanda, le solicito muy respetuosamente solicitarlo a la entidad demandada lo mismo con su respectiva constancia, dado que fue enviado al domicilio de la demandante, situación que manifiesto bajo la gravedad del juramento. Sin embargo, aparece la constancia de su expedición y el término de caducidad no ha vencido, que es finalmente para lo que interesa tal constancia, manifestando desde ahora que lo conozco plenamente.

VI. PRUEBAS Y ANEXOS

De la manera más respetuosa me permito manifestar que los documentos que se encuentran anexos a esta demanda son los siguientes:

- 1). Poder para actuar.
- 2).- Acto administrativo demandado.
- 3). Tiempo de servicio, certificado de salarios y fotocopia de la cédula de ciudadanía del demandante.
- 4).- Copias de la demanda para el traslado al Ministerio Público, a la entidad demandada y archivo.
- 5) –CD en formato PDF de la demanda.

VII. ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA

AÑO	SALARIO	PRIMA DE SERVICIOS
2011	\$2.425.592.00	\$1.212.796.00
2012	\$2.546.872.00	\$1.273.436.00
2013	\$2.634.615.00	<u>\$1.317.307.50</u>
TOTAL ADEUDADO:		\$3.803.539.50

VIII. COMPETENCIA

Es usted competente señor (a) Juez para conocer del presente juicio, por el origen del acto acusado, la entidad demandada y por razón del territorio porque mi representado presta sus servicios en el municipio de Guadalajara de Buga Valle.

IX. DOMICILIO PROCESAL Y NOTIFICACIONES

DEMANDANTE: Cale 11 No. 2-07 de Buga

DEMANDADO: EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, carrera 13 No. 6-50 de Buga Pbx: 2285750 Fax ext. 308.

APODERADO: Calle 3 No. 15-65 de Buga. Teléfono: 2388210. Correo electrónico: pedroariasabogado@hotmail.com

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO:

procesos@defensajuridica.gov.co
cobuzonjudicial@defensajuridica.gov.co

Atentamente,

PEDRO ILDEFONSO ARIAS ARAGON

C.C. N° 14.871.266 de Buga (V).

T.P. No. 64.838 CSJ.